

Comentario al artículo 18: Normas mínimas para la revisión de la sentencia

Fernando GASCÓN INCHAUSTI
Catedrático de Derecho Procesal
Universidad Complutense de Madrid

Trabajo publicado en *Comentarios al Reglamento por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía*, obra colectiva dirigida por Francisco López Simó y Federico Garau Sobrino, Ed. Dykinson, Madrid, 2010, págs. 277-292. ISBN 978-84-9772-267-4.

Artículo 18

Normas mínimas para la revisión de la sentencia

1. El demandado tendrá derecho a solicitar una revisión de la sentencia dictada en el proceso europeo de escasa cuantía ante el órgano jurisdiccional competente del Estado miembro en el que se haya dictado la sentencia en caso de que:

a) i) el formulario de demanda o la citación a una vista oral hayan sido notificados mediante un método que no garantice el acuse de recibo de los documentos por el propio demandado, según se establece en el artículo 14 del Reglamento (CE) nº 805/2004, y que

ii) la notificación no se hubiere efectuado con la suficiente antelación para permitirle preparar su defensa, sin que pueda imputársele responsabilidad por ello, o

b) el demandado no haya tenido la posibilidad de oponerse a la demanda por causa de fuerza mayor o circunstancias extraordinarias ajenas a su responsabilidad, siempre que, en ambos casos, haya actuado con prontitud.

2. Si el órgano jurisdiccional rechaza la revisión por no considerar aplicables ninguno de los motivos a que se refiere el apartado 1, la sentencia se considerará firme.

Si el órgano jurisdiccional resuelve que está justificada la revisión por alguno de los motivos a que se refiere el apartado 1, la sentencia dictada en el proceso europeo de escasa cuantía será declarada nula y sin efecto.

Sumario: I. Finalidad del precepto. – II. Naturaleza jurídica de la «revisión». – III. Las situaciones previstas en el art. 18 RPEEC y su encaje en el sistema procesal civil español. 1. Notificación con receptor subsidiario. 2. Fuerza mayor o circunstancias extraordinarias. 3. Consideraciones comunes.

I. FINALIDAD DEL PRECEPTO

1. Existen determinadas situaciones en las cuales no debe resultar admisible que se atribuya eficacia a una sentencia dictada al término de un proceso en el que no haya quedado debidamente garantizado el derecho de defensa del demandado. En general, cabe suponer que la legislación procesal interna de cada Estado –aplicable por defecto a los procesos europeos de escasa cuantía (art. 19 RPEEC)– se encarga de disponer los medios para evitar que algo así se produzca. No obstante, el legislador comunitario ha querido cerciorarse de que en ciertos supuestos especialmente graves sea posible para el

demandado reaccionar frente a una sentencia obtenida injustamente: es lo que sucede cuando el demandado ha permanecido de forma involuntaria en rebeldía durante la tramitación del proceso europeo de escasa cuantía o bien, por alguna causa que no le sea imputable, no ha podido defenderse en él.

Según se acaba de ver, el art. 17 se limita a remitirse a las legislaciones procesales nacionales a la hora de determinar si cabe o no algún recurso frente a las sentencias dictadas al término de un proceso europeo de escasa cuantía. El art. 18 corrige en cierta medida esa remisión y le garantiza al demandado la posibilidad de reaccionar frente a la sentencia dictada en rebeldía o situación análoga en que no se haya defendido, en los supuestos en que a dicha situación se haya llegado de manera involuntaria, esto es, por motivos que no le sean imputables. Estando garantizada esta posibilidad de promover la «revisión» de la sentencia, se puede asumir su fuerza ejecutiva directa en el resto de Estados miembros, pues de conformidad con lo establecido en el art. 23 la solicitud de revisión de la sentencia en el Estado de origen puede tener incidencia sobre el proceso de ejecución que se esté desarrollando en otro Estado con fundamento en aquélla.

De hecho, se contienen previsiones muy similares a ésta en otros instrumentos normativos comunitarios: así, el art. 19.1 RTEE quiere evitar que se puedan certificar resoluciones judiciales como títulos ejecutivos europeos si el ordenamiento procesal del Estado de origen no permite la revisión de aquéllas en supuestos análogos a los que nos ocupan ahora; y, en el mismo sentido, el art. 20.1 RPME también prevé que pueda revisarse un requerimiento europeo de pago si se dan estas condiciones.

II. NATURALEZA JURÍDICA DE LA «REVISIÓN»

2. El encabezamiento del precepto señala expresamente que lo dispuesto en él son «normas mínimas para la revisión de la sentencia». Cabe plantearse, en consecuencia, si se está estableciendo en él un cauce autónomo y especial de impugnación o si, por el contrario, únicamente se impone en él la exigencia de que pueda «revisarse» la sentencia en los términos previstos en él.

Es cierto que el aptdo. 1 del precepto delimita el supuesto de hecho de la revisión y que el aptdo. 2 define también una serie de consecuencias jurídicas que se asocian a aquélla. Pero se trata, a mi juicio, de elementos insuficientes para configurar por sí solos

un mecanismo especial de impugnación de resoluciones judiciales (firmes): así, v.g., no se define cuál sería el tribunal competente para conocer de esta revisión, pues sólo se señala que será un tribunal del Estado en que se haya dictado la sentencia; tampoco se contempla procedimiento alguno para sustanciar esta petición de revisión, ni se somete a plazo concreto, más allá de la referencia imprecisa a que se actúe «con prontitud»; y no están plenamente perfiladas las consecuencias en caso de que el tribunal considere justificada la revisión –más allá de la nulidad de la sentencia, no se aclara si las actuaciones se repondrán al momento de comisión de la infracción o si, por el contrario, será preciso iniciar de nuevo el proceso–.

En realidad, al incluir una norma de este tenor en el RPEEC el legislador comunitario ha querido definir el «mínimo» imprescindible de situaciones en las cuales ha de estar prevista la posibilidad de promover la impugnación de una sentencia dictada en rebeldía o en situación similar de falta de defensa activa del demandado¹. Si los supuestos contemplados en el art. 18.1 RPEEC reciben encaje dentro de alguna institución procesal preexistente en un Estado miembro, lo dispuesto en él sólo sirve para reafirmar que el demandado podrá servirse de aquélla también al término de un proceso europeo de escasa cuantía: entonces, para obtener el resultado querido por el Reglamento, al justiciable le bastará con acudir a una herramienta procesal de la que también dispondría de no existir el precepto en cuestión². En cambio, si no sucede lo anterior –es decir, si la legislación procesal interna de un Estado no permitiera la impugnación de sentencias firmes en ese tipo de situaciones–, el RPEEC sí que estará creando un cauce nuevo de impugnación, que habrá de ser desarrollado a nivel interno en sus dimensiones procedimentales³ y que, entre tanto, habrá de ser «gestionado» por los órganos jurisdiccionales del Estado en cuestión del mejor modo posible.

¹ A favor de entender que nos hallamos ante una norma de mínimos, cfr. R. MIQUEL SALA, *El proceso europeo de escasa cuantía*, Cizur Menor, 2009, pp. 154-156.

² En este sentido, cfr. también C. SENÉS MOTILLA, “El proceso europeo de escasa cuantía: primer paso hacia la armonización del proceso civil”, *Revista General de Derecho Procesal*, núm. 16, 2008, p. 24.

³ Es lo que sucede, aparentemente, en el Reino Unido, a tenor de las *Civil Procedure Rules* aprobadas en desarrollo del RPEEC: la *rule* 78.19 establece que el demandado, en su caso, habrá de presentar una solicitud para que se lleve a cabo la revisión prevista en el art. 18 RPEEC; y para la tramitación de la petición remite en bloque a la *Part 23* de las *Civil Procedure Rules (General Rules*

3. Se aprecia así de nuevo el carácter armonizador del RPEEC y su fuerza como norma definitoria de estándares mínimos en el ámbito del proceso civil en los Estados miembros, que no se ciñen al contexto exclusivo del proceso europeo de escasa cuantía. Para el legislador comunitario es imprescindible que en toda Europa un demandado pueda promover la privación de efectos a una sentencia ganada de modo claramente injusto contra él: por eso, el art. 34.2 RB-I permite denegar el reconocimiento y el exequátur cuando la sentencia se hubiera dictado en rebeldía del demandado, «si no se hubiere entregado al mismo la cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma tal y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse, a menos que no hubiere recurrido contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo».

El legislador comunitario, sin embargo, carece de competencia para forzar en positivo a los Estados a regular cauces de «revisión» de sentencias firmes con vigencia general: sólo puede hacerlo en aquellos ámbitos, muy reducidos, en que la consecución de los objetivos comunitarios le permite actuar normativamente de manera directa. Y por eso lo ha hecho en el art. 18 RPEEC, del mismo modo que antes lo hizo también en el art. 19 RTEE y en el art. 20 RPME. En lo que ahora nos importa, al hacer posibles este tipo de impugnaciones en procesos europeos de escasa cuantía, está sentando las bases para que los legisladores internos se vean compelidos, de forma refleja, a generalizarlos a todos los procesos civiles: se entendería mal por los justiciables que sus legisladores nacionales no dotaran de las herramientas necesarias para una mejor justicia a los procesos más ordinarios, mientras éstas existen en reductos muy singulares de la litigación civil.

4. Por supuesto, al margen de lo anterior, nada impide que las normas procesales de los Estados abran las puertas a la «revisión», a la rescisión o a la anulación de una resolución firme en otros supuestos, o en condiciones más favorables aún para el demandado que las consideradas como imprescindibles por el RPEEC⁴. El art. 18 sólo

about Applications for Court Orders). Algo semejante sucede en Alemania, a tenor del § 1104 ZPO, aprobado en desarrollo del art. 18 RPEEC y que no parece reconducirlo a ninguno de los cauces de impugnación de sentencias firmes que contempla el sistema procesal civil alemán; cfr. en este sentido A. BROKAMP, *Das Europäische Verfahren für geringfügige Forderungen*, Tubinga, 2008, p. 134.

⁴ Una disposición equivalente se encuentra, por ejemplo, en el art. 19.2 RTEE.

establece un mínimo, pero no un tope máximo de protección: por eso mismo, no resulta conveniente efectuar una lectura demasiado literal del primer párrafo del aptdo. 2, cuando señala que la sentencia se considerará firme si el tribunal no considera aplicable ninguno de los motivos a que se refiere el aptdo. 1. En efecto, la anterior afirmación sólo sería válida en caso de que la «revisión» *ex* art. 18 fuera la única vía de impugnación de la sentencia firme dictada en un proceso europeo de escasa cuantía. Pero si la legislación procesal interna de un Estado permite esa impugnación también en supuestos diferentes y adicionales, entonces es evidente que procederá la nulidad o la rescisión si se dan las condiciones requeridas en cada caso, sin que el art. 18.2 RPEEC sea un óbice para ello.

5. Por otra parte, y aunque en nuestro ordenamiento el término «revisión» suele ir asociado a la impugnación de sentencias firmes, lo cierto es que el tenor literal del art. 18 RPEEC no exige que deba serlo la sentencia frente a la que el demandado ha de poder reaccionar si se dan las circunstancias descritas en él.

Ahora bien, si la sentencia no es firme es porque cabe recurso frente a ella: y si el legislador nacional ha previsto algún recurso —como sucede con la apelación en España—, al demandado le bastará con interponerlo sin más, sin necesidad de invocar el art. 18.1 RPEEC. En efecto, las situaciones descritas en los apartados a) y b) del precepto han de ser en todo caso motivo suficiente para impugnar una sentencia —en España, para apelarla— y para que el tribunal la anule.

Por eso —y salvo que el legislador interno no hubiera previsto recurso alguno contra las sentencias dictadas en procesos europeos de escasa cuantía— lo dispuesto en el art. 18 sólo cobra real sentido cuando se trata de sentencias firmes: en estos casos es cuando puede serle necesario al demandado invocarlo para privar de efectos a una resolución frente a la que no podría reaccionar de otro modo.

III. LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL ART. 18 RPEEC Y SU ENCAJE EN EL SISTEMA PROCESAL CIVIL ESPAÑOL

6. Sentado lo anterior, resta determinar cuáles son las consecuencias de la vigencia del art. 18 RPEEC sobre los procesos europeos de escasa cuantía que se tramiten ante tribunales españoles. En concreto, se hace necesario determinar si en los

supuestos contemplados en él le está permitido al demandado, con arreglo a nuestra legislación procesal civil, reaccionar frente a una sentencia o no: en caso de respuesta afirmativa, se habrá verificado que nuestro ordenamiento supera el mínimo requerido por el legislador comunitario.

Antes que nada, y como puede fácilmente intuirse, debe señalarse que el término «revisión» está empleado por el Reglamento en un sentido amplio y genérico: encaja en esta noción todo cauce procesal que permita al demandado privar de eficacia a la sentencia dictada en su contra, ya se trate de un recurso, ya se trate de un medio extraordinario y especial para lograr la rescisión o la anulación de resoluciones firmes⁵. Debe quedar claro así que, a pesar de la coincidencia de nombres, la versión en español del RPEEC no se está refiriendo a la figura del proceso de revisión (arts. 509 a 516 LEC) —aunque tampoco cabe descartar que la sentencia firme dictada al término de un proceso europeo de escasa cuantía pueda ser sometida a revisión *stricto sensu*, si se dan las condiciones para ello—.

1. NOTIFICACIÓN CON RECEPTOR SUBSIDIARIO

7. El art. 18.1 RPEEC permite al demandado solicitar la «revisión» de la sentencia dictada en un proceso europeo de escasa cuantía en dos supuestos distintos. El primero de ellos se define por la concurrencia simultánea de tres circunstancias [art. 18.1 a)]:

— Que el formulario de demanda o la citación a una vista oral se hayan notificado por un método que no garantice el acuse de recibo por el demandado, es decir, que no se haya producido una notificación personal, sino a través de alguno de los mecanismos establecidos en el art. 14 RTEE.

Y debe tenerse en cuenta que esa notificación puede haberse practicado fuera de España, si el destinatario tenía su domicilio en otro Estado.

⁵ Así lo corroboran las versiones en otros idiomas del RPEEC, que también emplean términos genéricos, que no se corresponden con figuras o instituciones procesales concretas (v.g., *réexamen* en francés, *review* en inglés, *riesame* en italiano, *Überprüfung* en alemán o *revisão* en portugués).

— Que la notificación no se haya efectuado con la suficiente antelación para permitir al demandado organizar su defensa, sin que pueda imputársele responsabilidad por ello.

— Es preciso, además, que el demandado haya actuado «con prontitud».

Este tipo de situaciones, al menos desde la óptica de nuestro ordenamiento, se pueden producir en los casos en que la primera notificación se haya entregado a un receptor subsidiario, es decir, a persona distinta del deudor (cfr. art. 161.3 LEC: notificación que es recibida por un familiar o empleado del destinatario), cuando este receptor subsidiario no haya realizado después la entrega efectiva al destinatario, o bien la haya demorado, comprometiendo con ello su derecho de defensa.

Debemos plantearnos, en consecuencia, si nuestro ordenamiento ofrece a estos supuestos soluciones que permitan entender que se cumple lo previsto en el art. 18.1.a) RPEEC. La respuesta es afirmativa en todo caso, aunque ha de reconocerse que los instrumentos previstos pueden ser diferentes en función de diversas variables: en primer lugar, hay que tener en cuenta si la comunicación en sí puede considerarse o no válida, esto es, si la demora en que el destinatario recibiera la notificación, o el hecho de que ni siquiera le llegara, puede imputarse a una práctica de ésta no ajustada a las previsiones legales; y, en segundo término, también incide en este punto el dato de si el destinatario, en su caso, ha recibido la notificación antes o después de que haya precluido la posibilidad de realizar la actuación prevista para defenderse de la pretensión ejercitada contra él.

8. *Si el acto de comunicación fue defectuoso* (v.g., con arreglo a Derecho español, porque la notificación se entregó a un vecino o a un menor de catorce años), el demandado, una vez enterado de la existencia del proceso, podrá siempre comparecer en él y solicitar que se declare la nulidad de actuaciones, con la correspondiente retroacción y restitución de los plazos.

Si el proceso está aún pendiente cuando el deudor recibe finalmente la notificación, su solicitud se articulará por los cauces del incidente de nulidad de actuaciones previsto en el art. 240.2 LOPJ: si su alegación resulta estimada, la dificultad habrá desaparecido; si, por el contrario, es desestimada, tendrá la carga de recurrir la sentencia que se dicte alegando este defecto; y, en último término, si se acaba dictando sentencia firme que no haya tenido en cuenta la alegación del defecto, podrá formular demanda de amparo constitucional.

En caso de que ya haya recaído resolución firme cuando el deudor tuvo conocimiento de la notificación o del proceso, tendrá la carga de acudir al incidente especial de nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ; si el auto que lo resuelve no le concede la retroacción de actuaciones y la restitución de los plazos correspondiente, tendrá abierta la vía del recurso de amparo por vulneración del derecho fundamental a no padecer indefensión.

Téngase en cuenta que, cuando la notificación se haya practicado en el extranjero, su validez o nulidad habrá que medirla, en parte, con arreglo a la normativa procesal del Estado en que se haya efectuado y, en parte también, con arreglo al instrumento supranacional a través del cual se haya articulado, en su caso, la cooperación judicial internacional –en especial, el Reglamento 1393/2007 y el Convenio de La Haya de 1965–.

9. Es posible, sin embargo –y creo que el art. 18.1.a) RPEEC realmente está pensando en ello–, que *la notificación se haya realizado correctamente* y que, no obstante, el destinatario no haya recibido el objeto de la comunicación, o no lo haya recibido en tiempo razonable: son los «fallos del sistema» con los que hay que contar cuando la notificación no se entrega personalmente a su destinatario.

Si el demandado sólo ha llegado a tener conocimiento de la comunicación o de la propia existencia del proceso cuando éste ya ha concluido –normalmente, por sentencia–, se le pueden abrir dos vías de actuación, en función del momento y, también, de su voluntad. Así, en primer término, y si aún no le ha precluido el plazo para ello, podrá recurrir la sentencia en apelación y solicitar, con base en los argumentos que aduzca y en las pruebas que aporte en segunda instancia, la revocación de la sentencia y su sustitución por otra que le sea favorable (petición ésta que encaja dentro de la noción de «revisión» que maneja en este punto el RPEEC). Además, si ha permanecido constantemente en rebeldía, puede igualmente acudir a la «audiencia al demandado rebelde», como proceso especial y autónomo que le permite lograr la rescisión de la sentencia firme y el reinicio del proceso con la oportunidad de formular sus alegaciones: en concreto, fundará su demanda de audiencia en lo dispuesto en el motivo 2º del art. 501 LEC («desconocimiento de la demanda y del pleito, cuando la citación o emplazamiento se hubieren practicado por cédula, a tenor del artículo 161,

pero ésta no hubiese llegado a poder del demandado rebelde por causa que no le sea imputable»).

Los cauces de reacción son diversos si el demandado ha tenido conocimiento del formulario de demanda o documento equivalente cuando el proceso aún está abierto –y dando por sentado que la notificación ha sido formalmente correcta–⁶. En este caso, es preciso distinguir, a su vez, en función de la etapa del proceso en que efectivamente haya llegado a su conocimiento el objeto de la comunicación.

— Puede suceder, en primer término, que el demandado reciba la información cuando ya le ha precluido la posibilidad de presentar su escrito de contestación a la demanda, o de acudir a la vista provisto de las pruebas y habiendo preparado las alegaciones. En este caso, es indudable que ha padecido indefensión, pues se ha visto privado de la facultad de defender su posición jurídica por causas ajenas a su voluntad. Por ello, pienso que el demandado podrá personarse en el proceso y solicitar la nulidad de las actuaciones con arreglo al art. 240.2 LOPJ.

Es cierto que la notificación no es defectuosa y que, en sentido propio, no existe una nulidad procesal; pero es igual de cierto que, a pesar de la ausencia de nulidad, la indefensión padecida sería suficiente para fundar la estimación de un recurso de amparo constitucional⁷; por ello, es razonable extender a estos supuestos el ámbito de aplicación del incidente de nulidad de actuaciones *ante sententiam* del art. 240.2 LOPJ.⁸

— También hay que contar con la posibilidad de que el destinatario reciba la notificación cuando aún no le ha precluido la facultad de realizar la actuación defensiva pertinente, pero con un margen temporal reducido, de modo que no le sea posible articular en el tiempo de que dispone una actividad que permita mínimamente asegurar sus posibilidades de defensa.

En efecto, hay que partir de la premisa de que los plazos establecidos para la realización de alegaciones defensivas –aunque consistan en cumplimentar un formulario– o para la preparación de vistas tienen la duración que el legislador –en este caso el legislador comunitario– ha querido darles, porque es la que éste ha considerado idónea para preparar adecuadamente esas actividades. Por eso, si el demandado, de hecho, dispone de un plazo inferior al legalmente establecido –sobre todo cuando es notablemente inferior– cabe entender

⁶ Estos supuestos, realmente, no están cubiertos por las previsiones del art. 18 RPEEC, dado que éste se limita a contemplar mecanismos de reacción cuando ya se ha dictado sentencia.

⁷ En este sentido, cfr. I. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ (con I. BORRAJO INIESTA y G. FERNÁNDEZ FARRERES), *El derecho a la tutela judicial y el recurso de amparo. Una reflexión sobre la jurisprudencia constitucional*, Madrid, 1995, pp. 104-106.

⁸ Cfr., en este sentido y para este supuesto, E. VALLINES GARCÍA, *La preclusión en el proceso civil*, Madrid, 2004, pp. 397-405.

lesionado su derecho a la defensa: no resulta razonable exigirle al demandado que realice en condiciones desfavorables una actuación defensiva que tiene derecho a preparar adecuadamente.

Siendo así las cosas, el proceder adecuado habría de ser la comparecencia antes de que precluyera la posibilidad de realizar la actuación en cuestión, pero no para realizarla, sino para solicitar una restitución de los plazos o un nuevo señalamiento para la vista, al amparo de lo previsto en el art. 134.2 LEC.⁹ En caso de denegación de esta petición, cabría acudir al incidente de nulidad de actuaciones *ex art.* 240.2 LOPJ y posteriormente recurrir por este motivo la sentencia que se dictara, acudiendo en última instancia, frente a la sentencia firme, al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

10. Finalmente, debe tenerse en cuenta la exigencia de que el demandado perjudicado por el retraso en la recepción de la notificación actúe «con prontitud»: se trata simplemente de que la reacción del sujeto, una vez haya conocido la notificación, no se demore en el tiempo. Cabría formularla, pues, en el sentido de que le es exigible aprovechar la primera oportunidad procesal a su alcance para tratar de evitar los perjuicios que se le podrían derivar de la pérdida de oportunidades defensivas (*v.g.*, comparecer y solicitar prórroga de plazos, o solicitar la declaración de la nulidad de las actuaciones para evitar que se dicte una sentencia firme, o ajustar sus recursos o impugnaciones extraordinarias a los plazos legalmente fijados).

2. FUERZA MAYOR O CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS

11. El RPEEC exige también que sea posible revisar una resolución judicial recaída en rebeldía o situación similar, cuando «el demandado no haya tenido la posibilidad de oponerse a la demanda por causa de fuerza mayor o circunstancias extraordinarias ajenas a su responsabilidad» [art. 18.1 b] y siempre que –también en este caso– «haya actuado con prontitud».

12. En nuestro ordenamiento, los supuestos de imposible defensa por «fuerza mayor» están contemplados en principio como causa de rescisión de las sentencias firmes por los cauces del proceso de audiencia al rebelde: así lo establece el art. 501.1º

⁹ Para un estudio de las posibilidades que ofrece este precepto debemos remitirnos, de nuevo, a E. VALLINES GARCÍA, *op. cit.*, pp. 395 y ss.

LEC, que incluye tanto las situaciones en que el sujeto no tuvo conocimiento de la existencia del proceso, como aquéllas en que sí («fuerza mayor ininterrumpida, que impidió al rebelde comparecer en todo momento, aunque haya tenido conocimiento del pleito por haber sido citado o emplazado en forma»)¹⁰.

13. Por otra parte, la referencia a las «circunstancias extraordinarias» ajenas a la responsabilidad del deudor puede verse como una suerte de complemento, gracias al cual se quieren evitar las consecuencias de una eventual interpretación restrictiva de lo que ha de entenderse por «fuerza mayor». Aunque su concreción habrá de efectuarse a la luz de los datos que presente el caso concreto, nuestro ordenamiento ofrece varios posibles instrumentos de reacción:

— Así, es posible, en primer lugar, que las circunstancias extraordinarias se puedan reconducir a la noción de fuerza mayor, de manera que el demandado rebelde pueda reaccionar a través de la audiencia al rebelde del art. 501.1º LEC.

— También puede resultar viable el proceso de revisión, en caso de que las circunstancias extraordinarias integren un supuesto de cohecho, de violencia o de maquinación fraudulenta, al amparo del art. 510.4º LEC.

— Asimismo, la imposibilidad de defenderse por circunstancias extraordinarias ajenas a la responsabilidad del deudor merece ser calificada como indefensión, lo que abriría las puertas al incidente de nulidad de actuaciones (sea *ante o post sententiam*, en función del momento en que hubieran cesado las circunstancias y cupiera reacción) y, en su caso, a la demanda de amparo constitucional.

Esto sucedería, v.g., en los casos en que la fuerza mayor, según el art. 501.1º LEC, no ha sido ininterrumpida —de modo que no puede hablarse de rebeldía—, pero ha cesado en un momento en que el demandado no estaba ya en condiciones de defenderse (por preclusión o por insuficiencia del tiempo disponible). Y podría entenderse que tiene lugar lo anterior si el demandado ha contestado a la demanda pero por fuerza mayor o circunstancia análoga no ha podido acudir a la vista ni ha podido aportar pruebas, en caso de que el curso del proceso hubiera hecho necesarias estas actuaciones: y cabe asumir que la

¹⁰ El propio art. 18.1.b) RPEEC no aclara si es necesario o no el conocimiento de la existencia del proceso; el matiz, afortunadamente, carece de relevancia práctica, puesto que nuestro ordenamiento, en cualquier caso, ofrece respuesta a ambas situaciones —es decir, ofrece en todo caso al deudor la posibilidad de solicitar la «revisión» de la resolución—.

imposibilidad de acudir a la vista o de aportar pruebas comporta la privación de la posibilidad de oponerse a la demanda, en los términos en que lo establece el art. 18.1 b).

3. CONSIDERACIONES COMUNES

14. Según se acaba de comprobar, pues, las exigencias establecidas en el art. 18 RPEEC se ven satisfechas por nuestro ordenamiento: siempre que se consume alguno de los supuestos descritos en el aptdo. 1 del precepto el demandado, que ha padecido la merma de sus facultades de defensa, dispondrá de uno o de varios instrumentos que le permitirán «enderezar» la situación y promover la revocación de la resolución desfavorable.

Si no ha recaído aún resolución firme, tendrá a su disposición el incidente de nulidad de actuaciones *ante sententiam* o el recurso de apelación frente a la sentencia; y si ya se ha dictado sentencia firme, la herramienta de la que habrá de servirse será, en algunos casos, el incidente de nulidad de actuaciones *post sententiam*; en otros –la mayoría, presumiblemente–, la audiencia al rebelde¹¹; y cabe asimismo que en algún supuesto deba servirse del proceso de revisión. Lo dispuesto en el art. 18 RPEEC, por tanto, no obliga a instaurar un cauce especial de reacción frente a sentencias firmes, pues la finalidad que persigue ya se puede obtener con los instrumentos existentes: el precepto, por tanto, cumple perfectamente en nuestro país con el papel de «norma mínima» que tiene asignado.

Por eso mismo, tampoco es necesario darle desarrollo procedimental de ningún tipo, ni cubrir las lagunas que genera la parquedad de su enunciado:

— El órgano competente será el que corresponda, en función del tipo de instrumento procesal que proceda en cada caso: la Audiencia Provincial, si es un recurso de apelación (art. 455.2.2º LEC); el tribunal que esté conociendo del proceso, si se trata de un incidente de nulidad de actuaciones *ante sententiam* (art. 240.2 LOPJ); la Sala Primera del Tribunal Supremo, para los procesos de revisión (art. 509 LEC); y el

tribunal que hubiera dictado la sentencia firme, para la audiencia al rebelde (art. 501 LEC) y el incidente de nulidad de actuaciones *post sententiam* (art. 241.1 II LOPJ).

— El procedimiento para tramitar la petición de «revisión» será también el que corresponda al instrumento procesal que corresponda utilizar en el caso concreto.

— La única dificultad de encaje entre el art. 18 RPEEC y nuestra legislación procesal se puede plantear en relación con los efectos de la resolución estimatoria de la «revisión», es decir, que considere que en el caso concreto concurre alguno de los motivos contemplados en el primer apartado del precepto. En concreto, el art. 18.2 II señala que en tal caso «la sentencia dictada en el proceso europeo de escasa cuantía será declarada nula y sin efecto». Podría pensarse, en consecuencia, que no cumplen estrictamente lo dispuesto en la norma comunitaria ni el proceso de revisión ni el de audiencia al rebelde, pues son mecanismos que conducen a la rescisión de la sentencia, no a su nulidad. Y cabría también cuestionar hasta qué punto son compatibles con el precepto comunitario la retroacción de actuaciones seguida de la reanudación del proceso a que conducen la audiencia al rebelde y la nulidad de actuaciones *post sententiam*.

A mi juicio, el art. 18.2 RPEEC no ha querido descender a semejante grado de sutileza al definir las consecuencias de la estimación de una petición de «revisión»: el legislador comunitario ha querido simplemente referirse a la necesidad de que la sentencia quede privada en todo caso de eficacia y se ha servido a tal fin de la noción de nulidad, aunque en un sentido amplio y genérico¹¹. Por eso, no puede considerarse incompatible con las normas mínimas comunitarias que la causa de la pérdida de eficacia de la sentencia se encuentre en su rescisión –como ocurre con la audiencia al rebelde y con la revisión– y no en su nulidad.

¹¹ Cfr. también R. MIQUEL SALA, op. cit., pp. 158-159; y M. LOREDO COLUNGA, “¿Hacia un Derecho procesal europeo? Reflexiones en torno al proyecto de procedimiento europeo de escasa cuantía”, *Indret*, 1/2006, núm. 325, p. 20.

¹² La versión francesa habla de *nulle et non avenue* y la inglesa de *null and void*; en cambio, otras versiones lingüísticas del Reglamento no usan una dualidad de términos y se conforman con una referencia general a la nulidad –así sucede con la versión alemana (*nichtig*), o con las versiones italiana (*nulla*) y portuguesa (*nula*)–.

Y tampoco puede deducirse del tenor literal del precepto una voluntad del legislador de que el proceso quede privado de eficacia en su conjunto, de modo que no se admita una retroacción de las actuaciones: lo único que puede considerarse como «norma mínima» es que la sentencia quede privada de efectos; a partir de ahí, el legislador nacional será libre de forzar una reanudación automática del proceso –como la que tiene lugar cuando se estima la demanda de audiencia al rebelde o la nulidad de actuaciones¹³– o de arrojar sobre el demandante la carga de incoarlo de nuevo desde el principio –como ocurre con la revisión–.

15. Por último, debe insistirse en la idea de que el art. 18 RPEEC sólo establece un mínimo imprescindible. Por eso, quien haya sido demandado en un proceso europeo de escasa cuantía tramitado ante tribunales españoles dispondrá también, cuando proceda, del resto de instrumentos contemplados por nuestro ordenamiento: podrá acudir al proceso de revisión –dado que estos procesos no son sumarios–, al de audiencia al rebelde –en supuestos distintos de aquéllos a los que es reconducible el art. 18 RPEEC– y al incidente de nulidad de actuaciones –ante situaciones diversas a las contempladas por el legislador comunitario, pero igualmente lesivas de derechos fundamentales–. Además, dado el caso, dispondrá igualmente del amparo constitucional, en caso de vulneración de sus derechos fundamentales, en las mismas condiciones que si el proceso se hubiera tramitado por otros cauces procedimentales.

¹³ También lo prevé así el § 1104 ZPO, en los casos en que la revisión de la sentencia se ha planteado ante tribunales alemanes: según el precepto, el proceso habrá de retrotraerse al momento anterior a dictar sentencia. Cfr. A. BROKAMP, op. cit., p. 138.